

# 10

## Perspectivas de América Latina y el Caribe, desde el punto de vista del conflicto armado violento

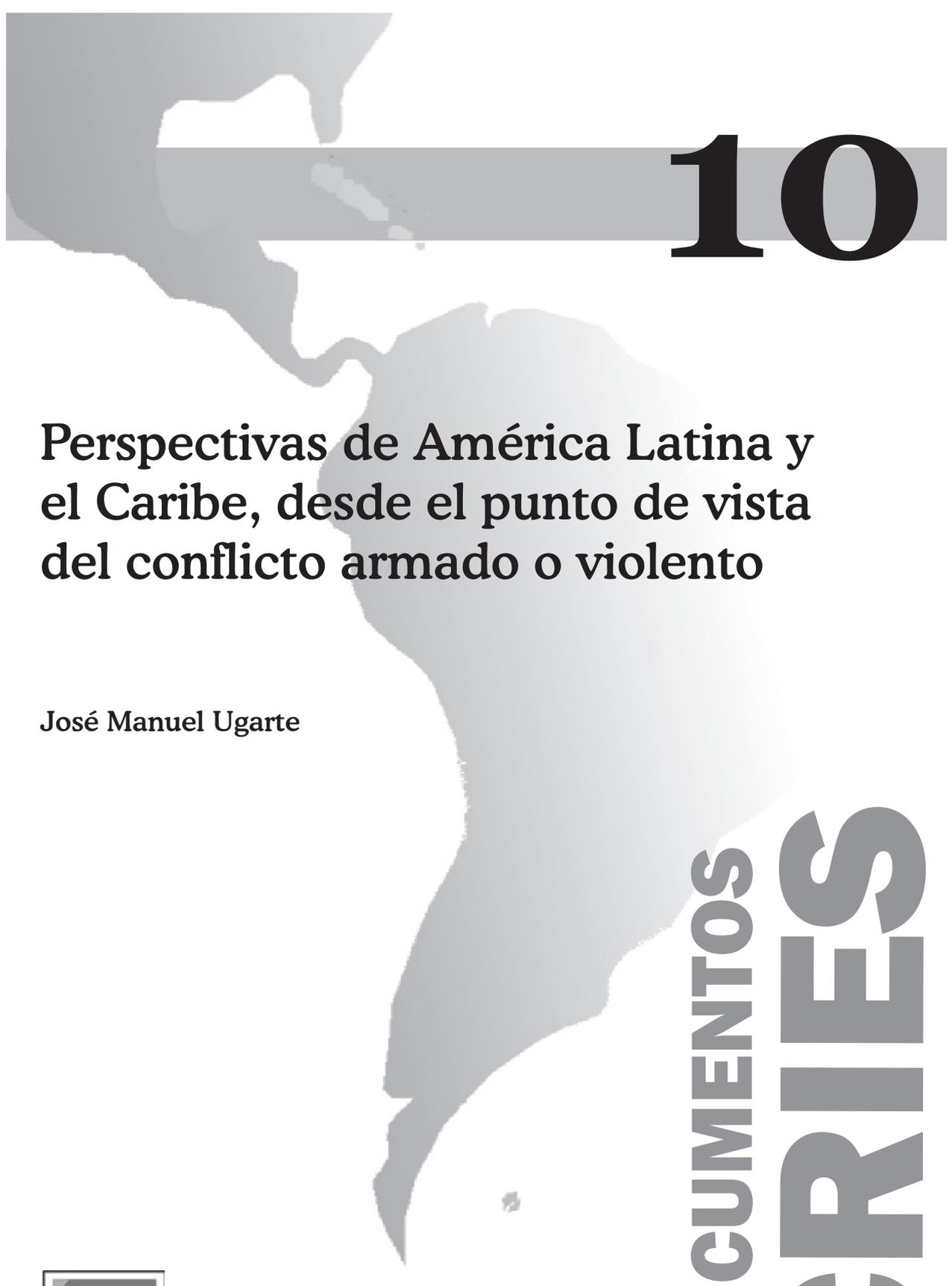
José Manuel Ugarte



Coordinadora Regional de  
Investigaciones Económicas y Sociales

DOCUMENTOS  
CRRIES





**10**

**Perspectivas de América Latina y  
el Caribe, desde el punto de vista  
del conflicto armado o violento**

José Manuel Ugarte



Coordinadora Regional de  
Investigaciones Económicas y Sociales

**DOCUMENTOS  
CRRIES**



## Presentación

*Documentos CRIES es una publicación de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales que periódicamente presenta artículos de investigadores de la región ligados a los programas y proyectos que desarrolla la Red.*

*Este conjunto de materiales constituyen un aporte invaluable tanto para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en distintos campos como para la discusión académica de los avances de los estudios sobre problemáticas de la región.*

*Confiamos que el conjunto de estos aportes contribuyan a ampliar el campo de discusión y de incidencia tanto de redes y organizaciones de la sociedad civil como de académicos y funcionarios de América Latina y el Caribe en el análisis de temáticas que afectan a la región.*

## Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales

La Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), fundada en 1982, es una red de centros de investigación, organizaciones no-gubernamentales, asociaciones profesionales y fundaciones, que promueven la investigación económica y social en América Latina y el Gran Caribe.

El propósito de CRIES apunta a la profundización de la participación de la sociedad civil en los procesos de integración regional y en la formulación e implementación de políticas públicas, así como en la promoción de una agenda para la integración comercial, social, política y cultural de América Latina y el Gran Caribe.

En la actualidad CRIES cuenta con más de 70 instituciones nacionales y regionales que participan en diversos programas de investigación e incidencia a nivel subregional y regional, orientados a fomentar la creación de un modelo regional de desarrollo social equitativo, participativo y sostenible de cara al nuevo milenio.

---

The Regional Coordination for Economic and Social Research (CRIES) established in 1982, is a research center, non-profit organization, professional association and foundation network to promote economic and social research in Latin America and Great Caribbean.

CRIES purpose is headed towards the deepening of civil society participation in regional integration processes, and the formulation and implementation of public policies, as well as the agenda promotion for integrating Latin America and Great Caribbean's commercial, social, political and cultural integration.

CRIES at present has more than 70 national and regional institutions that take part of various research and incidence programs at sub-regional and regional levels, oriented towards fomenting the creation of a fair, participative and sustainable social development regional model facing the new millennium.



# Perspectivas de América Latina y el Caribe, desde el punto de vista del conflicto armado o violento

## José Manuel Ugarte

*Abogado y especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública, profesor de grado y postgrado de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Católica de Santiago del Estero, de la maestría en Seguridad Pública del Instituto Universitario de Policía Federal Argentina, del Diplomado en Seguridad y Resolución de Conflictos de la Universidad Nacional de Catamarca y de las Escuelas Superiores de Gendarmería Nacional y de Prefectura Naval Argentina. Es, además, secretario académico del Foro Social para la Transparencia, organización de la sociedad civil integrante de la Mesa del Diálogo Argentino.*  
e-mail manugar@arnet.com.ar

## 1. Panorama general

Tanto desde el punto de vista del conflicto armado o violento, como de las causas que los originan, Latinoamérica y el Caribe, a pesar de sus diversidades, poseen puntos en común.

Es útil recordar aquí que a los efectos de nuestro análisis, consideramos *conflicto armado o violento* a aquél conflicto *entre unidades políticas soberanas* —Estados, entre sí y con *grupos sociales y políticos*, o *de estos últimos entre sí*, caracterizado por el empleo de ...*violencia colectiva, violencia utilizada como instrumento por personas que se identifican como parte de un grupo* —ya sea transitorio o con una identidad más permanente— *contra otro grupo o conjunto de individuos, para lograr fines políticos, económicos o sociales...*<sup>1</sup>

La aplicación estricta de esta definición nos lleva a la conclusión de que la región posee actualmente una escasa presencia de este tipo de conflictos, con la excepción de Colombia. No obstante, la presencia significativa de violencia producida por el delito organizado en algunas grandes ciudades brasileñas, aún no concordando estrictamente con ella, determina efectos en muchos aspectos similares. Por otra parte, el auge de la delincuencia y especialmente de las organizaciones criminales, del delito común e incluso de la violencia en diversos aspectos de la vida cotidiana, debe ser también tenido en cuenta para este análisis, por cuanto, si bien no constituye *conflicto armado o violento*, tiene un significativo potencial como posible causa futura de conflictos de este tipo.

América Latina padeció durante el conflicto Este-Oeste episodios que bien concuerdan con la definición aludida: las luchas, insurgencias, y represiones con gran pérdida de vidas, tales como las acaecidas en Guatemala, El Salvador y Honduras, en Centroamérica, y en el Cono Sur, en Argentina y en menor grado en Chile. Estos episodios han dejado entre sus secuelas en Centroamérica una profusión de armas y, en general, una cultura de violencia. También ha virtualmente concluido hace cierto tiempo, con sangriento saldo, el accionar en Perú de las guerrillas étnico-ideológica de Sendero Luminoso y Tupac Amará.

Hoy, el conflicto interno de Colombia, enfrenta al Estado colombiano y, pese a su proclamado desarme, a elementos paramilitares, con mo-

vimientos guerrilleros y con organizaciones de narcotraficantes.

En materia de conflictos armados internacionales, la región latinoamericana y caribeña experimenta actualmente una virtual ausencia de conflictos de este tipo. El último acaecido, la breve guerra entre Ecuador y Perú en el Alto Cenepa (1995), verdadero ejemplo de guerra limitada en la cual ambos países dosificaron cuidadosamente el daño que se inferían, tuvo rápida y eficaz conclusión por la intervención de los países garantes del acuerdo de paz vigente entre ambos países, y de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Por otra parte, América Latina y el Caribe continúan figurando entre las regiones del mundo con menor gasto militar en relación a su producto bruto interno.

La región no se encuentra, no obstante, en una situación idílica. Continúa siendo una de las regiones más inequitativas del mundo<sup>2</sup> y esa inequidad no se limita a los ingresos, sino que se caracteriza por ...*profundas diferencias en la libertad, o capacidad, de diferentes individuos y grupos de seguir las vidas de su elección...*<sup>3</sup> alcanzando a todos los aspectos de la vida, incluyendo educación, salud, servicios públicos, empleo, etc. Asumiendo a la *desigualdad* y a la *inequidad* como una condición de toda la región, existen, no obstante, profundas diferencias entre los países que la integran.

Tales diferencias se advierten de diversas maneras. Así, un estudio<sup>4</sup> de CEPAL-IPEA-PNUD relativo a la posibilidad de diversos países latinoamericanos de alcanzar las metas del milenio en materia de reducción a la mitad de la pobreza extrema en un lapso razonable, sobre la base del comportamiento de sus economías en la década de los '90, concluyó que de los países examinados, Argentina, Chile, Colombia, la República Dominicana, Honduras, Panamá y Uruguay tendrían esa posibilidad, mientras que Bolivia, Paraguay, Ecuador y Venezuela no la tendrían en absoluto, y otros países, como Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú requerirían un prolongado tiempo para lograrlo. Aunque hoy han variado en significativa medida los presupuestos económicos de este estudio, la lección es clara: no son iguales las posibilidades de los Estados de la región.

Desde otra punto de vista, la dispersión aludida se evidencia también en materia de desarrollo

humano, conforme a las estadísticas del PNUD, entre el puesto 36° de Argentina, 38° de Chile y el 42° de Uruguay, 48° de Costa Rica, 50° Cuba y 52° Bahamas, y el 117° de Honduras, 118° de Guatemala y 154° de Haití (2006)<sup>5</sup> lo que evidencia las notables disparidades existentes en la región y las dificultades que implica en muchos aspectos la adopción de consideraciones en conjunto.

La existencia de grandes franjas de la población sumidas en la pobreza, con graves carencias en materia de salud y educación, en una condición marginal que se transmite de generación en generación, se manifiesta tanto en la periódica eclosión de crisis sociales y políticas, como en el incremento de la criminalidad y la violencia. Continúa siendo pues plenamente válida la tesis de la *seguridad dividida* en América Latina de Surbine Kurtenbach<sup>6</sup> que contrapone a la intensificación de la tendencia a la cooperación y con ello al aumento de la seguridad en las relaciones bilaterales y regionales, el incremento de la criminalidad y de la violencia social y política en el interior de los Estados.

Todavía pesa sobre la región la *inestabilidad política* que se tradujera en las *crisis internas* paraguaya de 1999, argentina de 2001, boliviana de 2003, 2004 y 2005 y graves conflictos actuales, ecuatorianas de 1997, 2000 y 2005, peruana de 2000 (caída de Alberto Fujimori) las constantes y casi cotidianas crisis políticas en diversos Estados centroamericanos y la situación de crisis permanente política, económica y social que pesa sobre Haití, a lo que cabe sumar la permanente agitación venezolana, incluyendo el frustrado golpe de Estado contra el Presidente Hugo Chávez de Venezuela del 11 de abril del 2002, habiendo el ascenso político de Chávez comenzado precisamente con su protagonismo en el golpe de Estado también frustrado del 3 de febrero de 1992, contra el gobierno encabezado por el entonces Presidente Carlos Andrés Pérez.

A pesar de su diversidad, estas *crisis internas* presentan en su mayoría denominadores comunes, como la inequidad social, las dificultades económicas y la insatisfacción popular con la situación económica y social en sus respectivos países, así como el cuestionamiento popular a los partidos políticos tradicionales. Factores como el caudillismo político-militar y el amplio rol e involucramiento político de las fuerzas armadas, jugaron roles significativos en las crisis ecuatoria-

na, venezolana y paraguaya. En este último caso, se advierte una peculiar combinación de militar-proprietario-político en figuras claves del pasado y del presente como Stroessner, Rodríguez y Oviado, reflejo de un caudillismo político militar que, fuerte en el pasado, se encuentra aún presente en diversos países latinoamericanos.

Todavía la cuestión relativa al control civil respecto de las fuerzas armadas continúa siendo importante en Latinoamérica. Tiene aún mucho de válida la afirmación de David Pion-Berlin relativa a que... *El estado de los asuntos civiles-militares en Latinoamérica de hoy no es tanto apocalíptico como inestable. Puede ser detectado progreso hacia el elusivo objetivo, pero es tres pasos adelante y dos atrás...*<sup>7</sup> Si bien se han realizado significativos avances en tal sentido, todavía en diversos países sudamericanos —Ecuador, Venezuela, Paraguay, Colombia— y centroamericanos —Guatemala, Honduras— las fuerzas armadas continúan poseyendo un poder político significativo, y en Centroamérica en general —con la obvia excepción de Costa Rica<sup>8</sup> y Panamá, que carecen de ellas— tienden actualmente a recuperar la autonomía, y el control de la seguridad interior que constituyera base de su poder en el pasado. En otros países —Perú, Bolivia, El Salvador, México, en distintos grados— un control civil aún imperfecto determina la existencia de un grado significativo de autonomía militar en diversos aspectos. Brasil y Chile, con muy significativos avances, conservan algunos bastiones de la vieja autonomía militar. Aún Argentina, que ha logrado un destacable avance en esta materia, está ciertamente lejos de los estándares propios de países con una larga tradición democrática. Tales circunstancias pueden constituir un factor a considerar en caso de crisis política o económica, e incluirse en las causas de *conflicto armado o violento*.

Por otra parte, si bien en materia de conflictos interestatales cabe formular un pronóstico favorable en cuanto a la ausencia de conflictos armados interestatales en el corto plazo, hoy se presentan factores que obligan al examen y a la reflexión. A la grave situación interna que atraviesa Bolivia, con la reactivación y creciente dinamismo del antiguo fantasma del separatismo cruceño, beneficiado por un sutil estímulo ideológico desde el interior y exterior del país, se une la búsqueda constante de protagonismo político del presidente venezolano Hugo Chávez, con fuerte grado de confrontación política con la superpotencia americana, Estados Unidos de América.

Chávez protagoniza además un muy publicitado reequipamiento militar, dirigido fundamentalmente hacia la construcción de capacidades defensivas —disuadir una eventual invasión<sup>9</sup>. Ha suscripto también un acuerdo de cooperación militar con Bolivia<sup>10</sup>, que hasta el momento aparece como más retórico que real, brindando un inequívoco apoyo al gobierno boliviano en su confrontación con el secesionismo. Por otra parte, el presidente venezolano, militar retirado, mantiene e intensifica una política de abierto desafío a Estados Unidos de América, especialmente desde el fracaso del golpe de Estado intentado en su contra. Las desinteligencias políticas entre el presidente venezolano Chávez y el presidente colombiano Uribe, fiel y cercano aliado de Estados Unidos de América, y la persistencia de conflictos territoriales entre Colombia y Venezuela, alimentan interrogantes en la materia.

Una hipotética intervención armada de Estados Unidos de América destinada a derrocar al presidente venezolano Chávez, aunque nunca totalmente descartable dado el significativo activismo internacional del presidente estadounidense Bush y el antecedente representado por la utilización por su parte del recurso a la fuerza de modo unilateral frente a Irak, y el simétrico activismo internacional en su contra de Chávez, parece poco probable, ante las complicaciones que podría traer aparejadas para el abastecimiento petrolero a Estados Unidos que Chávez ha cuidado bien de mantener, el grave deterioro que traería para las relaciones estadounidenses con diversos países latinoamericanos, y, por sobre todo, el actual empeñamiento de Estados Unidos de América en el Medio Oriente, circunstancias que verosímelmente moverán a Estados Unidos de América a confiar la contención de Chávez a otros países de la región, fundamentalmente Brasil y Argentina.

Venezuela presenta no obstante el espectáculo de una sociedad profundamente dividida entre el gobierno populista, predominantemente militar, de Hugo Chávez, electo democráticamente y que cuenta con el evidente apoyo de la mayoría de la población, y una oposición formada por las clases medias, altas, y la mayoría de los profesionales e intelectuales del país. Las elecciones del 3 de diciembre de 2006 determinaron el rotundo triunfo de Chávez con el 61% de los votos, contra el 38% de su oponente Manuel Morales, ratificando su popularidad y manteniéndose la división y polarización apuntadas.

En esta revista de hipotéticos conflictos internacionales resulta inevitable recordar el audaz plan del presidente boliviano Evo Morales de nacionalización de recursos hidrocarburíferos y de incremento en el precio del gas que vende a Argentina y Brasil. Mientras que la primera aceptó rápidamente los incrementos, la negativa inicial de Brasil —que se siente perjudicado, además, por la nacionalización de activos de la estatal Petrobrás en Bolivia— introdujo elementos de inicialmente complejo diagnóstico, felizmente superados, al menos momentáneamente. Se trató de un acuerdo en el que ambas partes mostraron flexibilidad: Bolivia, postergando transitoriamente sus pretensiones respecto del grueso del gas vendido a Brasil con destino a Sao Paulo, consistentes en obtener como mínimo el precio acordado con Argentina, y, muy especialmente Brasil, al acceder rápidamente a casi triplicar el precio percibido por el gas enviado a Cuiabá (Mato Grosso) y a un leve incremento en el resto.

Resulta evidente que la decisión del presidente brasileño Luiz Inácio da Silva, no exenta de costos internos<sup>11</sup> reveló habilidad y equilibrio, al colocar a su país, dueño de una abrumadora superioridad económica y militar sobre su vecino, además de poseer contratos de provisión en plena vigencia, en la posición de negociador racional y cauto sobre bases económicas y jurídicas y no de fuerza, poniendo a su país en la posición de un liderazgo responsable y pacífico que al propio tiempo descarta por innecesaria toda ingerencia externa, contribuyendo al propio tiempo a la paz en la región, brindando simultáneamente apoyo al mandatario boliviano, jaqueado por los movimientos secesionistas.

La pericia demostrada por *Lula* en su manejo de los conflictos derivados de las acciones de Morales, evidencia las nuevas lógicas en materia de resolución de conflictos y prevención de conflictos armados existentes en la región.

Décadas atrás, la respuesta brasileña hubiera sido una rotunda negativa amparada en la letra de los contratos y en despliegues militares preventivos, a lo que tal vez se hubiera agregado —de persistir Bolivia en su reclamo, y amenazar cortar el suministro— un apoyo político e incluso militar por su parte al secesionismo del oriente boliviano. Ello hubiera reinstalado las dinámicas del conflicto en la región, obligado a otros países a armarse, e incluso facilitado intervenciones de potencias

externas. Muy lejos de ello, y a un costo económico y político razonable, *Lula* consolida lenta pero seguramente el liderazgo político y económico de su país en la región, sumando aliados, proyectando una imagen de moderación y responsabilidad, y eludiendo al propio tiempo ingerencias externas a Bolivia y Brasil en la cuestión.

En otro orden de ideas, cabe señalar que un realmente significativo equipamiento militar chileno, basado en los crecientes recursos proporcionados por la explotación del cobre y la aplicación de la Ley Reservada del Cobre, permite a este país contar con las fuerzas armadas mejor equipadas de la región.

Ello podría hipotéticamente representar riesgos para Argentina, dados los prolongados conflictos limítrofes que mantuviera con su vecino del oeste, o para Bolivia, que continúa reclamando la salida al mar perdida en la Guerra del Pacífico, o aún para Perú. No obstante, la persistencia de los vínculos comerciales, viales, energéticos y de inversiones creados entre Chile y Argentina construidos en el marco de la integración subregional, que ha tenido un capítulo particularmente intenso entre Argentina y Chile a partir de, y facilitada por, la solución de los conflictos limítrofes existentes otrora entre ambos países, desalienta posibles conflictos.

A ello se agregan los buenos vínculos políticos y personales existentes entre las respectivas dirigencias, y la creciente cooperación en materia militar entre ambos países, materializada en la constitución de un Estado Mayor combinado y de una fuerza de tareas combinada para operaciones de paz. Ese conjunto de circunstancias favorables va permitiendo superar los roces surgidos con motivo de las dificultades experimentadas en el abastecimiento por Argentina de gas a Chile.

También la administración chilena de la Concertación, especialmente a partir de Ricardo Lagos y con la continuación eficaz de Michelle Bachelet, ha procurado construir confianza con la República del Perú a través del *Comité de Seguridad y Defensa (COSEDE)* y el *Comité Permanente de Consulta y Coordinación Política*<sup>12</sup> (con similitudes con el *COMPERSEG* vigente entre Argentina y Chile —1995— y el *Mecanismo de Consulta y Coordinación* —1997— entre Argentina y Brasil) así como de disminuir tensiones y de procurar avanzar en la solución pacífica del conflicto limítrofe que le

plantea Bolivia, haciendo de ese modo positivos aportes a la construcción de la paz en la región.

La continuación del avance chileno en materia de consolidación del control civil sobre sus fuerzas armadas, y el fortalecimiento de la integración entre ambos países habrán de disipar definitivamente los sutiles interrogantes que restan en esta materia. Es la integración, en definitiva, lo que habrá de permitir que cualquiera sea el signo político del gobierno de ambos países, los intereses comunes existentes entre ambos impongan la continuación y aún profundización de la paz y de la cooperación, y todo permite suponer que ello acontecerá en el futuro.

Entre Argentina y Brasil persiste el clima de cooperación e integración recíproca. Ambos países constituyen el eje del MERCOSUR. La persistencia —a pesar de las dificultades— de la vitalidad del bloque económico subregional, constituye una de las mejores garantías de la continuidad de la paz en la región, por la constante creación de lazos comunes que desalientan los conflictos<sup>13</sup>.

De allí la importancia que cabe asignar como riesgo al eventual retiro de Uruguay y, en mucho mayor grado, de Paraguay, cuyo eventual aislamiento y transformación en zona de asiento de fuerzas militares no regionales o, peor aún, de organizaciones delictivas, podría constituir un significativo riesgo de conflicto armado o violento en la región, a lo que es necesario sumar que colinda con el área de posible conflicto del oriente boliviano, antes señalada.

La incorporación de Venezuela al bloque subregional aporta energía y recursos financieros al bloque. No obstante, a las indisimulables dificultades derivadas de la excesiva búsqueda de protagonismo internacional del presidente venezolano Hugo Chávez, su búsqueda de acuerdos con el gobierno iraní encabezado por Mahmud Ahmadineyad enfrentado con Estados Unidos de América por los planes nucleares iraníes, y su constante activismo verbal contra este último país, introducen elementos de irritación y riesgo —bien que no inmediato— en la subregión.

El conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación por parte del último país de las industrias pasteras —hoy de la pastera Botnia— en el río Uruguay continúa enfrentando a ambos países, como

demostración paradigmática de impericia política y diplomática por ambas partes. Mientras que Argentina invoca trasgresiones por tal motivo por parte de Uruguay en el Tratado del Río Uruguay vigente entre ambos países y amenaza de contaminación ambiental, la población de ciudades argentinas como Gualeguaychú y en menor medida Colón y Concordia bloquean periódicamente las rutas que conducen a Uruguay en señal de protesta, causando a Uruguay perjuicios económicos. En definitiva, la instalación de Botnia y el conflicto se mantienen constantes, como motivos de irritación y daño a las relaciones entre ambos países, y de perjuicio para el MERCOSUR.

No obstante, su transformación en conflicto armado o violento permanece como un riesgo virtualmente inexistente, dada la importancia y profundidad de los intereses comunes y de los lazos históricos existentes entre ambos países. Todo parece indicar que con las lógicas dificultades, el conflicto habrá de evolucionar hacia una solución negociada, con o sin la intervención *facilitadora* del Rey de España y de su delegado Juan Antonio Yáñez Barnuevo.

La *Triple Frontera* continúa constituyendo un ámbito caracterizado, especialmente en la localidad paraguaya de Ciudad del Este, por la profusión de diversas formas de delito organizado —particularmente contrabando, falsificación de marcas, tráfico de drogas y de armas, y de blanqueo de activos originados en delitos.

No obstante, su importancia en materia de prevención de conflictos deriva en buena parte de la sospecha estadounidense de la utilización de fondos de origen legal e ilegal por parte de la fuerte comunidad musulmana residente en la zona para financiar operaciones de terrorismo islámico internacional, y de la persistencia de acusaciones, generalmente extraoficiales, por parte de organizaciones estadounidenses, respecto de la presencia de *células terroristas dormidas* en la zona.

Argentina, Brasil y Paraguay han implementado diversas formas de cooperación en materia de seguridad en el área, a través de la creación de un mecanismo de coordinación policial, el *Comando Tripartito de la Triple Frontera*, así como de la coordinación en materia de seguridad pública del MERCOSUR ampliado establecido a partir de la *Reunión Especializada de Ministros del Interior o*

*equivalentes (RIM)* y con el establecimiento de mecanismos permanentes de cooperación en materia de inteligencia, como el *Ámbito Terrorismo* y el recientemente creado *Centro de Inteligencia*<sup>14</sup>, y la constitución, con Estados Unidos de América, del *Foro Tres más uno*, en el que periódicamente se analiza la situación. No obstante, las dudas estadounidenses parecen persistir.

Aunque una intervención militar directa estadounidense no aparece probable, dada la inexistencia de causas reales demostrables para ello y el daño permanente que ocasionaría a las relaciones con los países de la región, especialmente Brasil y Argentina, el área continúa constituyendo fuente de interrogantes.

Tales interrogantes tienden a incrementarse con las alternativas de la política paraguaya, en la que una oposición aparentemente decidida a concluir a todo costo con el virtual *reinado* del Partido Colorado no vacila, para obtener sus propósitos, en incorporar al general de división Lino César Oviedo, protagonista de dos golpes de Estado e imputado respecto del asesinato del entonces vicepresidente Luis María Argaña, y en favorecer la instalación de una base militar estadounidense en Mariscal Estigarribia, dotada de pista de aviación para transportes de gran porte y cercana a la conflictiva zona boliviana de Santa Cruz de la Sierra.

Así, la aparente reversión anunciada para 2007 de la decisión del gobierno paraguayo de otorgar inmunidad penal a las tropas estadounidenses y de realizar ejercicios combinados con tropas estadounidenses (2005), así como la negativa de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos —apartándose del MERCOSUR— podría mutar drásticamente, cambiando de manera significativa el panorama de la subregión. Paraguay, en definitiva, requiere de una atenta mirada en todo análisis que se efectúe de la situación política imperante en el Cono sur.

En materia de *conflictos internacionales*, la persistencia de otros *conflictos territoriales o marítimos* —fundamentalmente, Colombia-Venezuela, Venezuela-Guyana, Guatemala-Belice y Honduras-Nicaragua, por mencionar aquellos que han derivado en mayor tensión—<sup>15</sup> no aparece como determinante de *conflictos armados o violentos*, aunque en el caso Colombia-Venezuela cabe considerar como factores de incremento de tensión

las muy diversas visiones políticas y relaciones con Estados Unidos de América de sus actuales mandatarios.

En materia de *crisis internas*, el Cono Sur presenta diversas realidades.

Ha quedado muy atrás la crisis política, social y económica argentina que concluyera el 20 y 21 de diciembre de 2001 con el mandato del presidente Fernando de la Rúa, y el país va superando lentamente, con la paulatina disminución del desempleo y el mejoramiento de la situación social, la agitación social expresada por los *piqueteros*, organizaciones constituidas por desocupados y personas en situación de marginalidad que organizan periódicamente manifestaciones y obstrucción de rutas y calles. Se mantienen no obstante en niveles muy altos la criminalidad y la delincuencia organizada, tendiendo incluso a incrementarse en la ciudad de Buenos Aires.

Brasil, con crecimiento económico y tecnológico, y poseedor de modo holgado de la mayor economía de Sudamérica, presenta aún altos niveles de pobreza, indigencia y marginalidad, reflejada, entre otros lugares, muy especialmente en los suburbios de las más grandes ciudades brasileñas, Sao Paulo y Río de Janeiro.

La delincuencia organizada en dichas ciudades constituye, por su importancia, recursos, control de territorio y de población, posesión de armas, incluyendo armamento de naturaleza bélica, y disponibilidad de dinero, un verdadero desafío para el Estado, y organizaciones como el PCC —*Primeiro Comando da Capital*— han desafiado al gobierno, obligándolo por momentos a negociar.

Del mismo modo, el poder territorial ejercido por los narcotraficantes en las *favelas* de Río de Janeiro parece insuperable para el gobierno.

Cabe destacar la importancia del delito organizado, especialmente en las grandes ciudades brasileñas, dedicado al tráfico de drogas, de armas, asaltos a entidades bancarias, residencias particulares y ómnibus, secuestros, *piratería del asfalto*, lavado de dinero, reclutando abundante mano de obra entre la numerosa juventud marginalizada y adicta a las drogas que encuentra en las organizaciones criminales contención y un sentido —ciertamente

trágico— a sus vidas. Las organizaciones criminales ejercen un control virtualmente absoluto en los barrios pobres de grandes ciudades brasileñas, aplicando sus propias normas. Al contrabando de armas como fuente de provisión del nutrido armamento en poder de las organizaciones criminales, se unen deficiencias en los controles de venta de armas y la tendencia en la población de proveerse de armas para su defensa, legales originariamente, pero que fácilmente caen en manos de delincuentes.

Los efectos de la violencia imperante en las grandes ciudades brasileñas se verifican especialmente en los homicidios de que son víctima jóvenes, a punto de hacerse referencia, en una publicación obrante en un *website* oficial brasileño, como el problema más dramático en el área de la seguridad, al ...*genocidio a que está siendo sometida la juventud brasileña, especialmente la juventud pobre del sexo masculino y, en particular, los jóvenes negros...* Las cifras confirman esa apreciación.<sup>16</sup>

El conflicto armado interno de Colombia continúa plenamente vigente y sin soluciones cercanas. Una antigua guerrilla originada en problemas estructurales de la sociedad colombiana puestos en la fragua del conflicto Este-Oeste, hoy bien financiada con la protección del narcotráfico, las exacciones impuestas a las empresas multinacionales que operan en su zona de influencia y los secuestros extorsivos, prosigue su accionar pese a los esfuerzos militares del Presidente Uribe, del apoyo estadounidense en el *Plan Colombia* y de la política de *Seguridad Democrática*. También los elementos paramilitares, presuntamente desarmados, continúan actuando, manteniéndose plenamente la militarización del país y la sistemática violación de derechos humanos, así como el riesgo de *derrame* del conflicto en la región, especialmente en Ecuador y Brasil.

En Haití, donde la MINUSTAH bajo comando militar brasileño puede exhibir la realización de elecciones y donde René Préval ha iniciado un nuevo mandato luchando contra el fantasma de Jean-Bertrand Aristide, el auge de la pobreza extrema, las enfermedades, la delincuencia organizada, la violencia cotidiana, la profusión de armas, la perpetuación en el poder real de una pequeña elite, y, por sobre todo, contra la inviabilidad económica actual del país, donde el deterioro del suelo, la carencia de agua potable, la virtual falta de industria, comercio, inversiones y de conocimientos, integran el círculo

vicioso que lleva al fracaso. Préval actualmente se apuesta a actuar contra la violencia a través de la reforma de la policía y el desarme de la población, y contra el atraso, con la cooperación económica internacional. En suma, un pronóstico difícil, en el que la esperanza radica en la obtención de una estabilidad mínima y en el apoyo internacional para mejorar la situación económica del país.

La enfermedad de Fidel Castro en Cuba y la delegación por su parte de su autoridad en su hermano Raúl Castro —segunda figura burocrática y política del país, y ministro de Defensa y Comandante de las Fuerzas Armadas— quien la ejerce sin que se adviertan fisuras en la monolítica estructura militar-política-burocrática cubana, ha desactualizado todas las especulaciones sobre una posible transición política en la isla, demostrando la posibilidad de subsistencia del sistema político cubano aún privado, cuando menos por un tiempo significativo, del liderazgo personal y carismático que ejercía Fidel Castro. Las perspectivas parecieran hoy favorables en el corto plazo para la permanencia en lo esencial del actual sistema con una apertura económica moderada al modo chino, siempre que se mantenga la actual unidad en la antes referida estructura, se obtenga una mejora significativa del nivel de vida del pueblo cubano, y se logre una legitimación similar a la que brindaba el liderazgo de Castro. El incremento de la explotación petrolera y las perspectivas de fuertes reservas de hidrocarburos, así como el apoyo económico y energético de Venezuela, contribuyen a alejar inmediatas perspectivas de crisis.

Por su parte, Estados Unidos de América, que había creado sucesivamente una *Comisión de Ayuda a Cuba Libre* y un cargo de *Coordinador de la Transición en Cuba*<sup>17</sup>, y encarado medidas de incremento de la propaganda en Cuba, auxilio a organizaciones de la sociedad civil no comprometidas con el gobierno y a disidentes, y restringido viajes y remesas de dinero a la isla, habrá previsiblemente, al menos durante la actual administración, de incrementar tales medidas, absteniéndose de otras acciones en tanto se mantenga la actual situación en la isla. Eventuales cambios políticos derivados de las próximas elecciones estadounidenses podrían abrir nuevas perspectivas en el futuro.

Los pequeños estados insulares del Caribe, sin afrontar situaciones de riesgo de *conflicto armado o violento*, deben no obstante hacer frente, con

Estados con limitadas posibilidades, al delito organizado —particularmente narcotráfico, tráfico de drogas y de armas— que adquiere poder territorial en las ciudades, al amparo en algunos casos de conexiones políticas. Dificultades económicas, inequidad social, marginalidad, limitaciones de abastecimiento de agua potable, fuerte propensión geográfica a desastres naturales —huracanes, inundaciones— con consecuencias sociales y económicas, auge de la violencia que llega incluso a las relaciones familiares, conforma un cuadro que aunque excluye en el corto y posiblemente en el mediano plazo el *conflicto armado o violento*, determina la necesidad de trabajar en su prevención.

Centroamérica ha superado los trágicos enfrentamientos internos que la caracterizaran durante la vigencia del conflicto Este-Oeste, y ha evitado conflictos armados internacionales en su seno con el auxilio del *Tratado Marco de Seguridad Centroamericana*, instrumento útil para preservar la paz internacional en la región.

No obstante, viejas y riesgosas confusiones entre defensa nacional y seguridad pública y entre funciones policiales y militares no evitadas en el aludido instrumento, el clamor popular en diversos países por seguridad para personas y bienes afectados por fenómenos como el delito organizado, y el desafío a la seguridad pública —y a la vez social— representado por las *maras*, la profusión de armas livianas derivada de los pasados conflictos, y la permanente y aún agravada inequidad social, están facilitando una progresiva remilitarización de la seguridad pública y una creciente autonomía militar que amenaza poner en riesgo los logros en materia de control civil y desmilitarización trabajosamente obtenidos en los '90s. La persistencia por parte de Estados Unidos de América en propiciar en Latinoamérica una seguridad pública con medios militares, pese a las negativas experiencias habidas, y la renovada influencia adquirida por dicho país a través del *CAFTA*, acuerdo de libre comercio que se superpone a una nunca totalmente lograda integración económica centroamericana, plantea serios interrogantes hacia el futuro respecto del retorno de conflictos armados internos, bien que no en el corto plazo.

México combina crecimiento macroeconómico en el marco del *NAFTA* con subsistentes inequidad social, auge de delincuencia organizada, y violencia. La polarización provocada por el reñido

resultado de las últimas elecciones y el cuestionamiento de su resultado por la oposición de izquierda refleja en definitiva las divisiones padecidas por la propia sociedad. Aunque el surgimiento del *conflicto armado o violento* no aparece como probable, episodios como la revuelta zapatista recuerdan la necesidad de un trabajo de consolidación institucional, superación de la inequidad económica y social, superación de la marginalidad e integración social, que aleje la perspectiva de tales conflictos.

## 2. La incógnita de Paraguay

Paraguay representa cierta incógnita en la región. Gobernado políticamente desde 1946 en forma ininterrumpida por el Partido Colorado<sup>18</sup>, conjunción de grandes propietarios rurales, militares, y burócratas gubernamentales, padeció la prolongada dictadura del general de división Alfredo Stroessner Matiauda, miembro del Partido Colorado que obtuvo el poder por un golpe de Estado el 4 de mayo de 1954, siendo finalmente derrocado por otro golpe de Estado protagonizado el 3 de febrero de 1989 por su consuegro y hombre de confianza, el general de división, Andrés Rodríguez Pedotti, también miembro del Partido Colorado, quien convocó a elecciones y asumió con una amplia mayoría.

Éste inició un proceso democrático de trabajosa consolidación, caracterizado por serias crisis internas, y por la presencia política del caudillismo propietario-militar, que tuvo entre sus protagonistas más significativos al general de división Lino César Oviedo. Oviedo fue protagonista de una tentativa de golpe de Estado en abril de 1996 contra el gobierno encabezado por el presidente Juan Carlos Wasmosy, imputándosele posteriormente el asesinato del vicepresidente paraguayo Luis María Argaña (durante el gobierno encabezado por Raúl Cubas Grau) hecho que dio lugar a la crisis de marzo de 1999, que culminara con la renuncia de Cubas Grau y el exilio de Oviedo, lo que no constituyó óbice para la producción del intento de golpe de Estado del 18 de mayo de 2000, por parte de militares simpatizantes de Oviedo. Actualmente encarcelado, Oviedo no obstante continúa dirigiendo la UNACE<sup>19</sup>, uno de los partidos protagónicos de oposición al gobierno del actual presidente Nicanor Duarte Frutos.

El empeño fundamental de la oposición paraguaya es concluir con el verdadero reinado del Partido Colorado, a cuya perpetuación atribuyen los males que soporta el país. Un reconocido luchador por las libertades públicas sostiene que ...*La realidad sólo se puede cambiar constituyendo un movimiento opositor institucional...*<sup>20</sup>

La búsqueda de alternancia política por parte de los partidos de oposición tiene tal intensidad, que un miembro del *Partido Liberal Radical Auténtico*, desprendimiento del antiguo *Partido Liberal de Oposición*, y hoy segunda fuerza política del país, manifestó su apoyo a la candidatura presidencial de Oviedo, si éste encabezara a la oposición<sup>21</sup> manifestando su apoyo a la concesión de una base militar a Estados Unidos de América, para obtener su apoyo, ante lo que calificó como fracaso del MERCOSUR para Paraguay. Recientemente, Blas Llano, presidente de *PLRA*, se reunió con Oviedo en la prisión en que se encuentra éste.<sup>22</sup> La creación de la *Concertación Nacional* entre el *PRLA*, la *UNACE* ovidista, otros partidos de oposición y distintas organizaciones sociales, reflejó con gran heterogeneidad ese deseo de cambio. Del encono de la lucha política da cuenta la circunstancia de haber anunciado la *Concertación* su propósito de impulsar la remoción de los miembros de la Corte Suprema y de otros tribunales nacionales, afirmando la existencia de un plan para desconocer un eventual triunfo electoral de la oposición.<sup>23</sup>

Finalmente, la constitución de una alianza electoral entre el *PRLA*, la *UNACE*, *Encuentro Nacional*, *País Solidario* y *Demócrata Cristiano*,<sup>24</sup> que habrá de dirimir la cuestión relativa a candidaturas en una elección primaria a padrón abierto—en la que ciertamente no cabría descartar un triunfo de la *UNACE*— determinó la retirada de organizaciones sociales nucleadas en torno al ex obispo Fernando Lugo, que con el apoyo del partido político *Paraguay Posible*, refleja las aspiraciones del campesinado y de otros sectores sociales postergados de Paraguay.

Uno de los aspectos más salientes de la actual situación política paraguaya es la creciente resistencia al MERCOSUR, especialmente por parte de la oposición, algunos de cuyos integrantes plantean la conveniencia de abandonar el bloque subregional, destacándose que ante la imposibilidad actual de continuar su clásica política pendular entre Argentina y Brasil, hoy

Paraguay ensaya una política pendular entre el MERCOSUR y el ALCA<sup>25</sup>.

Desde la perspectiva crítica paraguaya, Argentina y Brasil limitan la entrada a sus mercados y aún el tránsito por sus territorios de los productos primarios paraguayos de exportación, les venden productos industriales de baja calidad, y les imponen el arancel externo común que encarece la obtención de productos de calidad y tecnología de los países centrales<sup>26</sup>. Se llega a afirmar que Paraguay, con el MERCOSUR, se integra a los países de la Triple Alianza de 1865-1870. Parece evidente la necesidad de un esfuerzo por parte del MERCOSUR para brindar mayores alicientes a los países relativamente pequeños que integran el bloque, y así lo han entendido Argentina, Brasil y Venezuela, procurando incrementar su cooperación con Paraguay.

Tal necesidad no reconoce solamente motivos comerciales. La política estadounidense de conformación de un espacio de libre comercio que abarque la totalidad de América, a través de negociaciones bilaterales con cada uno de los países latinoamericanos —hoy enderezada exclusivamente a obtener acuerdos bilaterales de libre comercio— encontró terreno fértil en el descontento paraguayo. Más aún, el gobierno paraguayo realizó ejercicios militares con Estados Unidos brindándole la inmunidad penal que éste solicitara. Aunque esta decisión fue revisada<sup>27</sup>, la existencia de conversaciones relativas al establecimiento de una base militar estadounidense en Mariscal Estigarribia (Chaco Boreal) donde existe una pista de aterrizaje que permitiría la operación de aviones bombarderos estratégicos B-52 y aviones de transporte estratégico Galaxy<sup>28</sup> han causado preocupación en la subregión. Esta posibilidad, hoy no impulsada por el gobierno, es apoyada por parte de la oposición paraguaya en su búsqueda de aliados. De materializarse, transformaría drásticamente la situación política y militar sudamericana, al facilitar eventuales despliegues militares en gran escala en áreas estratégicas de América del Sur, tales como Santa Cruz de la Sierra, epicentro del movimiento secesionista de Bolivia, que procura apoyos externos.

De todos modos, el epicentro del descontento con el MERCOSUR en Paraguay parece estar centrado fundamentalmente en el *PLRA*. Mientras que el

gobierno, en una actitud ambivalente y negociadora, parece finalmente decidido a continuar, es en dicho partido donde se concentra la postura de ruptura con el bloque, especulando probablemente con la obtención de apoyo estadounidense para concluir con el *reinado* del Partido Colorado. La nueva izquierda, el campesinado y organizaciones sociales nucleados en *Paraguay Posible*, no plantean este aspecto en su campaña, oponiéndose enérgicamente en cambio a la instalación de bases militares estadounidenses en el país.

Parece evidente que un eventual triunfo electoral de Oviedo, o cuando menos, la puesta en libertad de Oviedo en el marco de un triunfo electoral de los partidos que lo apoyan, inauguraría un escenario de seria confrontación y muy probablemente de violencia política en Paraguay, con características que bien podrían recordar las de los hechos de 1999; y, por otra parte, consecuencias de otro orden, en cuanto a la permanencia e incremento de la presencia militar de Estados Unidos en Paraguay.

Entretanto cabe mencionar la singular circunstancia relativa a la realización del ejercicio combinado *Hermandad* (setiembre de 2006)<sup>29</sup> que incluyó efectivos militares de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Venezuela (septiembre de 2005) en el Campo General Ávalos (Corrientes) y en diversas localidades de Misiones, con participación de tanques, vehículos blindados de transporte de personal y artillería de campaña, entre otros elementos.

La hipótesis adoptada, no frecuente en este tipo de ejercicios —especialmente dado el lugar donde se realizó— es la invasión de uno de los países integrantes de la hipotética alianza participante en el ejercicio, por un país imaginario ajeno a ella, procurando los integrantes de la alianza repeler la invasión.

### 3. Los riesgos de Bolivia

Bolivia continúa constituyendo la gran incógnita latinoamericana y el mayor riesgo de *conflicto armado o violento* en la región, con la obvia excepción del ya vigente colombiano.

El nuevo gobierno encabezado por Evo Morales, de origen indígena, electo por el 53% de los votos,

culmina un ciclo de crisis internas en este país que enfrenta múltiples factores de conflictividad social, derivados de los más altos índices de pobreza y desigualdad social de Sudamérica y un enfrentamiento étnico-político-económico entre la población andina y del altiplano (quechua, aymará y mestiza), y la población de las llanuras orientales, de composición predominantemente blanca.

El crecimiento de la explotación de hidrocarburos, fundamentalmente del gas, en Tarija, la búsqueda de la apropiación de esa riqueza a través de la nacionalización de los hidrocarburos y la renegociación de los precios del gas exportado a Argentina y a Brasil, una reforma tributaria, la reforma agraria, y una disminución de los salarios del sector público, han constituido las bases sobre las cuales Morales ha procurado satisfacer las demandas sociales fundadas en el predominio de la extrema pobreza. El éxito logrado hasta el momento con las nacionalizaciones de hidrocarburos y el incremento de los precios del gas a sus vecinos, no sin tensiones regionales, especialmente con Brasil, ha permitido un aumento de los ingresos fiscales.

La convocatoria de una Asamblea Constituyente, donde se discuten temas fundamentales como el rol del Estado, los derechos de propiedad y la tenencia de la tierra, enfrenta al gobierno no sólo con la oposición, sino especialmente con los departamentos de Santa Cruz de la Sierra, Beni, Pando y Tarija, que reivindican su autonomía en base a un referéndum habido el 1º de julio de 2006, en el que la mayoría de la población se pronunció por una autonomía basada en el régimen comunitario español, antecedente para muchos observadores de un proyecto secesionista que en el caso de Santa Cruz, tiene hondas raíces históricas.

El proyecto de reforma agraria enfrenta además particularmente al gobierno con las familias terratenientes de Santa Cruz de la Sierra, Pando y Beni, lo que agrega un fuerte incentivo económico y social a las aspiraciones secesionistas.

Las tácticas dilatorias de la oposición política, apoyadas en su mayoría en el Senado, y la creciente impaciencia de los integrantes de la heterogénea coalición política que en realidad constituye el partido gobernante MAS por la falta de concreción de los cambios sociales prometidos, no deja de agregar elementos de tensión.

Aunque continuamos creyendo que el nivel de probabilidad de acaecimiento de un conflicto armado o violento en Bolivia, o que involucre a Bolivia, continúa siendo relativamente bajo en el corto plazo, dicha probabilidad tiende a incrementarse en el mediano plazo.

El viejo pero remozado fantasma del separatismo cruceño, ahora incrementado con los departamentos de Beni y Pando, y el sureño de Tarija, constituye un conflicto que enfrenta a los departamentos del sur y oriente boliviano, ricos particularmente en agricultura, petróleo y gas, en las que predomina el origen étnico caucásico, con epicentro en la próspera ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y que pugnan por la autonomía y aún por la independencia para utilizar fundamental o exclusivamente sus recursos en provecho propio, y en las cuales predomina la etnia blanca y el conservadorismo político, con las provincias del centro y oeste del país, mayoritarias en población, de origen étnico indígena, cuyos recursos naturales se basan en la minería y el cultivo de la coca, en las que impera la mayor pobreza del país, cuyo actual predominio se expresa en el presidente Evo Morales, de ascendencia indígena, donde prevalece la izquierda política, y que procuran mantener el sistema unitario del país, para obligar a las provincias ricas a distribuir sus recursos con el resto del país.

Constituye un conflicto de significativa complejidad, donde las regiones pobres del país invocan la contribución que efectuaron al desarrollo del sur y oriente hoy rico, y éstos desean volcar sus importantes recursos para incrementar su desarrollo y bienestar.

Fácil resulta advertir que de haber persistido en las actualidad las lógicas geopolíticas en materia de política exterior de Argentina y Brasil en las décadas de 1930 o 1940, cada uno de ambos bandos tendría un protector y un proveedor de armamento y dinero, interesado en una probable futura anexión, a la manera de los tres repartos de Polonia entre Austria, Prusia y Rusia del siglo XIX.

Afortunadamente, los tiempos han cambiado, y la política de los principales países de la región exhibe prudencia y lucidez a largo plazo.

Cabe ratificar una vez más que la pieza maestra de la paz imperante en el Cono Sur y también de la exitosa superación de crisis internas por la inexistencia de factores externos que procuren su agravamiento y la erupción de la lucha fratricida, continúa siendo la integración subregional entre Argentina, Brasil y Chile y la consiguiente creación entre los países de múltiples lazos comerciales, industriales, financieros, viales, energéticos, de coordinación en materia de seguridad pública y de inteligencia e incluso de cooperación militar, que desalientan los conflictos, comprometiendo en la continuación de la paz y de la cooperación a sus sectores empresarios, y construyendo valores comunes en lo político.

#### 4. El nudo inextricable de Colombia

El prolongado conflicto armado interno colombiano continúa sin perspectivas cercanas de solución. Mientras que la aplicación de la política de *Seguridad Democrática* del Presidente Álvaro Uribe y el *Plan Colombia* estadounidense-colombiano puede exhibir cierto descenso en indicadores de seguridad como la tasa de asesinatos y secuestros, especialmente en centros urbanos, así como un incremento del control territorial por el Estado colombiano, persiste una grave crisis humanitaria, advirtiéndose un incremento de las acciones armadas.<sup>30</sup> Nada permite afirmar, no obstante, que hayan disminuido las capacidades militares de los movimientos guerrilleros, mientras se incrementa la crisis humanitaria.

Por otra parte, las aludidas políticas de seguridad incremental el rol de las fuerzas armadas en la seguridad interna, habiéndoseles asignado la función legal de mantener el orden público y de aplicar las leyes antiterroristas, de lo que se ha derivado un incremento en las violaciones a los derechos humanos y el incremento de la autonomía militar, con las correlativas consecuencias institucionales.

Tampoco ha logrado el gobierno concluir con el accionar de los grupos paramilitares de *Autodefensas Unidas de Colombia*, pese a las negociaciones habidas con el gobierno para la desmovilización y el desarme de estos grupos, en un proceso iniciado en el 2003 y presuntamente

concluido el 17 de abril de 2006, sin que el accionar de estos grupos concluyera realmente.

A pesar de que las organizaciones guerrilleras *ELN* y, en menor medida, *FARC*, han expresado su voluntad de encarar negociaciones de paz, las posiciones, dada la magnitud de las exigencias de los insurgentes para iniciar negociaciones, y la actitud gubernamental de considerar a sus integrantes como delincuentes armados —sin reconocer la existencia de conflicto armado interno— aleja toda posibilidad de paz.

Por su parte el narcotráfico, pese a la destrucción de los grandes carteles, prosigue intensamente su actividad fraccionado en pequeños carteles distribuidos en el territorio, con protección de las *FARC*, y *de las AUC*. La reducción en el tamaño de las parcelas cultivadas con narcóticos dificulta su localización y fumigación.

Estados Unidos, finalmente, continúa impulsando políticas de interdicción armada del narcotráfico, fumigación y erradicación de los cultivos, tácticas que no han producido mayores resultados ante el fenómeno de la dispersión de los cultivos y la reducción del tamaño de las parcelas, sin que el área cultivada se redujera.

En definitiva, en las condiciones actuales, todo permite prever la continuación del conflicto armado y del narcotráfico. La falta de una real voluntad política de las partes involucradas para la búsqueda de una solución negociada del conflicto armado, cuyas causas estructurales permanecen intactas —cabe suponer incluso que la prolongación del conflicto armado es funcional a los intereses de parte de la sociedad colombiana— y la reiterada demostración de la imposibilidad de una solución puramente militar del conflicto, determina la probabilidad de su continuación, en niveles similares a los actuales.

Cabe destacar el valioso rol de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el representante especial del Secretario General de la ONU, en cuanto a monitorear y procurar la reducción de las violaciones a los derechos humanos producidas en el conflicto —tropezando con crecientes obstáculos, especialmente por parte gubernamental. También por parte del *PNUD*, en procura de paliar las causas estructurales del conflicto.

Continúa apareciendo como la solución más adecuada un plan de paz conducido por la Organización de las Naciones Unidas en El Salvador y Guatemala, que no se limite al desarme y desmovilización de los irregulares y a la reforma de los sectores de defensa, seguridad pública e inteligencia, sino que encare reformas estructurales del país destinadas a subsanar las causas profundas del conflicto, con participación en la gestión y propuesta, de la sociedad civil.

Ello no obstante aparece como altamente improbable en las circunstancias señaladas.

## **5. Perspectivas, propuestas, y rol de la sociedad civil**

El futuro en Latinoamérica no aparece como homogéneo.

En Sudamérica parece firme la tendencia hacia una integración regional económica y coordinación política progresiva con eje en el MERCOSUR y países asociados, pese a sus todavía grandes limitaciones y dificultades. El descontento de Paraguay y Uruguay requieren respuestas que incluyan el perfeccionamiento institucional del bloque, incluyendo un adecuado sistema de solución judicial rápido y eficaz de controversias, que aseguren plenas posibilidades a todos los países de acceder a los mercados de los restantes y ser destinatarios de inversiones extranjeras.

La aludida integración excede los aspectos meramente comerciales —en los que, además, no escasean las dificultades. En realidad, lo fundamental es la existencia, entre Argentina, Brasil y Chile, al decir de Francisco Rojas Aravena, de...*cuatro elementos principales: a) una comunidad valórica; b) una voluntad política de asociación; c) el desarrollo democrático y la generación de cláusulas de apoyo mutuo en esta materia y d) el fin de las amenazas tradicionales en sus expresiones más significativas en el Cono Sur...*<sup>31</sup>

Los Estados insulares del Caribe y Guyana construyen su integración. El Pacto Andino, debilitado por el retiro de Venezuela y por los acuerdos de libre comercio celebrados por Perú y Colombia con Estados Unidos, procura continuar su marcha.

Centroamérica y México parecieran dirigirse hacia la integración comercial y alianza política con Estados Unidos de América sobre la base del CAFTA-NAFTA. No obstante, en Centroamérica poseen aún fuerza significativa las tendencias hacia una integración subregional propia y basada en las propias necesidades y posibilidades, y en materia política, el triunfo del sandinismo en Nicaragua demuestra que aún persisten el debate ideológico y visiones diversas de la sociedad.

El Caribe presenta los interrogantes fundamentales de Cuba, que tiende en el corto plazo a consolidar su sistema político y su viabilidad económica con el apoyo venezolano y la explotación de petróleo, y de Haití, cuyo futuro requiere de una acción eficaz contra la violencia y del apoyo económico internacional. En otros Estados insulares del Caribe, mientras la República Dominicana optó por el CAFTA, el resto opta por la integración en el marco del CARICOM, manteniendo buenas relaciones con Estados Unidos y Gran Bretaña.

Consideramos que en el corto plazo son bajas las posibilidades de conflicto armado internacional en Latinoamérica. En ese pronóstico pesan la integración subregional en el Cono Sur con eje en el MERCOSUR, con la correlativa formación de lazos físicos, energéticos, comerciales y de inversiones que tienden a desalentar conflictos, la existente coordinación de políticas y de valores comunes entre Argentina, Brasil y Chile, la construcción de intereses comunes entre los miembros originales del bloque subregional y el nuevo miembro Venezuela, con recíproco beneficio y que tiende a limitar el activismo internacional del Presidente Chávez, y la demostrada capacidad de diplomacia preventiva por parte de los mandatarios y diplomacia en la región. En Centroamérica, el *Tratado Marco de Seguridad Centroamericana* y los órganos constituidos conforme a sus disposiciones se han revelado como eficaces para prevenir conflictos armados de carácter internacional.

El riesgo mayor de conflicto armado internacional en la región —y, simultáneamente, de conflicto *armado o violento* interno— reside en el secesionismo boliviano sumado a factores posibles factores externos, tanto venezolanos —el prometido apoyo armado del Presidente Chávez a su colega Morales— como los que podrían derivarse del sutil elemento externo

representado por la situación paraguaya y la posibilidad de que futuros gobiernos de dicho país proporcionen a Estados Unidos una base militar relativamente cercana, tanto a Santa Cruz de la Sierra, como a la *Triple Frontera*, también foco de conflicto potencial. Aquí nuevamente se advierte la importancia del MERCOSUR como factor aglutinador de políticas exteriores en el Cono Sur, pero también el desafío de lograr un MERCOSUR que sea más útil a Paraguay e incluso a Uruguay.

Si las tendencias secesionistas bolivianas no reciben apoyos externos, los conflictos a que obedecen hallarán probablemente soluciones pacíficas en el marco del sistema político boliviano.

El activismo verbal y de gestos políticos del Presidente Chávez contra Estados Unidos no habrá de traducirse en una intervención militar de este último, en tanto éste no afecte intereses considerados vitales por la superpotencia continental, como el abastecimiento petrolero, o la lucha contra los insurgentes colombianos.

Tampoco aparece como probable una intervención armada estadounidense contra Cuba, mientras se mantenga la actual unidad de la elite militar-burocrática-política cubana.

En el mediano plazo, la continuación de esa situación está ligada a la continuación, fortalecimiento y profundización de la integración en Sudamérica, y a la vigencia en Cuba, de modo no traumático y basada en elementos internos, de un sistema de gobierno apoyado por su población y que satisfaga sus aspiraciones.

En materia de *conflictos armados o violentos* internos y *crisis internas*, la situación es más compleja. Colombia continúa constituyendo un caso vigente de *conflicto armado o violento* en la región, cuya superación, aunque no imposible, no aparece como cercana. El delito organizado en grandes ciudades brasileñas, sin constituir estrictamente conflicto de ese tipo, genera efectos similares o equivalentes.

En general, el gran desafío en Latinoamérica en materia de *prevención estructural de conflictos*, es atacar y resolver eficazmente la *inequidad social* hoy presente, bien que en diverso grado, en todos

los países que la integran, y brindar adecuadas oportunidades en materia de satisfacción de necesidades, salud, educación y empleo a todos sus habitantes.

Resolver ese problema requiere la continuación y perfeccionamiento del sistema democrático, y también una acción decidida por parte de los Estados y gobiernos en esa dirección. Se impone también para la viabilidad de estos propósitos, lograr la progresiva *integración* de los países de la región, desde la propia región —o sus subregiones—tendiendo a la resolución de sus problemas, en base a sus propias necesidades y posibilidades.

Encarar la prevención de las *crisis internas* susceptibles de derivar en *conflictos armados o violentos* requiere trabajar en el perfeccionamiento de las instituciones del sistema democrático, y en la idoneidad y transparencia de la administración pública, los órganos legislativos y en la justicia en todos sus niveles. El descreimiento de los ciudadanos en sus instituciones políticas ha constituido, junto con la ya señalada inequidad, componentes invariables de tales crisis.

Enraizado fundamentalmente en la inequidad, la marginalidad, y la corrupción en los sistemas penales y políticos, el fenómeno del *delito organizado* y aún del incremento de la delincuencia común constituye causa cercana de *conflicto armado o violento* y en algunos casos, como el ya señalado de las organizaciones criminales en grandes ciudades brasileñas, ocasiona efectos muy similares a los que son propios de dicho tipo de conflicto. Fenómenos como el *Primeiro Comando da Capital* en Brasil, o la *Mara Salvatrucha* en El Salvador (hoy extendido) no muestran sino la incapacidad de las respectivas sociedades de brindar educación, salud, oportunidades de empleo e integración adecuada a sus jóvenes, y su superación requiere inevitablemente actuar sobre esos factores a través de políticas nacionales y locales específicas, contando además con un sistema penal caracterizado por órganos judiciales imparciales e idóneos, un sistema penitenciario y post penitenciario capaz de reeducar y reinsertar, y un accionar policial caracterizado por la racionalidad, gradualidad, estricta adecuación de medios a fines y preservación de la vida e integridad física.

En el corto y mediano plazo, Bolivia continúa constituyendo la probabilidad más cercana de *conflicto armado o violento* interno, hoy materializado en el secesionismo cruceño, conflicto de origen no sólo político, sino económico y étnico. Sin intervenciones externas, creemos que dicho conflicto puede ser superado en el marco del sistema político boliviano. Permanece no obstante como el mayor riesgo de conflicto en la región.

En menor medida, Paraguay afronta un difícil proceso político con factores productores de serias crisis políticas en el pasado, con debilidad institucional que favorece ingerencias externas y del delito organizado.

La compleja situación política ecuatoriana, con un marco de inestabilidad política, aspectos étnicos, y fuerte déficit en materia de control civil de las fuerzas armadas, también reclama atención.

En Venezuela, la polarización social y política determina también cierto riesgo en materia de *crisis internas*. En menor grado, la situación de México, sociedad polarizada políticamente, con problemas étnicos y sociales, también requiere seguimiento.

Pese a ello, preciso es señalar que en Latinoamérica, *crisis interna* no constituye en modo alguno sinónimo de *conflicto armado o violento*. Así, en Centroamérica, protagonista durante el conflicto Este-Oeste de graves conflictos de ese tipo, particularmente en Guatemala, El Salvador y Nicaragua —alimentados por factores externos— hoy reiteradas crisis políticas internas son superadas dentro de los respectivos sistemas políticos, a veces con la cooperación de países vecinos, amigos, de mecanismos subregionales o regionales; y en el Cono Sur, con la *diplomacia preventiva* practicada por mandatarios de países vecinos.

Por ello cabe considerar que aunque existe cierta probabilidad de producción de *crisis internas*, consideramos que en el corto plazo no habrán de producirse nuevos *conflictos armados o violentos* en la región. El mediano plazo presenta mayores interrogantes, supeditados en buena medida a la continuación de las condiciones favorables antes enunciadas. Bolivia continúa constituyendo la incógnita más grande de la región.

Con relación al *rol de la sociedad civil*, cabe destacar que a excepción de Centroamérica, especialmente Guatemala —de larga experiencia, proporcional a la duración y gravedad del *conflicto armado interno* que experimentó<sup>32</sup>— Nicaragua y Costa Rica, la región tiene escasa presencia y experiencia de la sociedad civil en materia de *prevención del conflicto armado o violento*.

Por ello, ha resultado fundamental el rol de del Programa *El Rol de la Sociedad Civil en la Prevención del Conflicto Armado o Violento en América Latina y el Caribe*, impulsado en la región por CRIES, y posteriormente de la *Plataforma LAC* en el marco del GPPAC, para poner el tema en la agenda de las OSC de la región e impulsar la construcción de análisis propias de prevención de conflictos en la región.

Sin embargo, existen en diversos grados en toda la región —especialmente en Centroamérica y el Caribe— una significativa actividad de las OSC en aspectos que constituyen materia de *prevención estructural* de conflictos armados o violentos, como de *prevención sistémica*. Preciso es, pues, aunar a tales actividades, capacidades de *análisis de conflicto regionales*, así como actividades dedicadas más específicamente a la prevención de conflictos, particularmente en materia de *prevención operacional*, donde la *diplomacia ciudadana* ya existente podría actuar eficazmente. Como señalara Andrés Serbin, ...*en cuanto a la emergencia de conflictos armados se refiere, la diplomacia ciudadana, ejercida por las redes y organizaciones regionales que, desde una perspectiva ética abogan, en los ámbitos nacionales y multilaterales, en la construcción y consolidación de una región pacífica, tiene un rol relevante...*<sup>33</sup>Para ello es imperativo *avanzar en la capacitación específica de la sociedad civil*, en aspectos específicos de *prevención del conflicto armado o violento*.

También se impone avanzar en la construcción de *mayores y mejores espacios de interlocución de la sociedad civil* tanto en los organismos estatales de *relaciones exteriores, defensa nacional y seguridad pública*, como en aquellos procesos de integración subregional que como el MERCOSUR, aún no cuentan con ellos.

Creemos que el futuro mostrará un rol más activo de las OSC de América Latina y el Caribe, en la prevención del *conflicto armado y violento*.

## Notas

1. José Manuel Ugarte (2007). “Estudio Subregional sobre Prevención de Conflictos y Rol de las Organizaciones de la Sociedad Civil en dicha materia, en el Cono Sur”, publicado en *Paz, conflicto y sociedad civil en América Latina y el Caribe*. Buenos Aires: Icaria Editorial, IDRC, CRIES. También disponible en [www.gppac.net/documents/GPPAC/Regions/LAC/research/Subregion\\_Conosur.doc](http://www.gppac.net/documents/GPPAC/Regions/LAC/research/Subregion_Conosur.doc) (acc. 5.9.2007). La definición de *violencia colectiva* está tomada de, Organización Panamericana de la Salud (2003), editado por Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony B. Zwi y Rafael Lozano, *Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud*, Washinton D.C. 2003, Capítulo 8 *Violencia Colectiva*.
2. Banco Mundial, *Inequality in Latin America and the Caribbean, Breaking with History*, informe del Banco Mundial, disponible en <http://www.wbln0018.worldbank.org/lac/lacinfoclient.nsf> (acc. 15.9.2007) y manifestaciones de sus autores David de Ferranti, Guillermo Perry, Francisco H. G. Ferreira y Michael Walton, en el sentido que: ...*Latinoamérica es altamente desigual con respecto a ingresos, y también exhibe acceso inequitativo a educación, agua, y electricidad, así como grandes disparidades en voz, activos y oportunidades. Esta inequidad torna más lento el ritmo de la reducción de la pobreza, y debilita el proceso de desarrollo en sí...*
3. Banco Mundial, *Ibid.* Capítulo I, pág. 1-23.
4. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2003). *Hacia el objetivo del milenio de reducir la pobreza en América Latina y el Caribe*, Libros de la CEPAL, Santiago de Chile, Santiago de Chile, febrero de 2003, también disponible en [www.undp.org/Urbllac/poverty/documents/html](http://www.undp.org/Urbllac/poverty/documents/html) (acc. 5.2.2007).
5. Fuente: P.N.U.D. (2006).
6. Surbine Kurtenbach (2003). “El nuevo escenario de (in)seguridad en América Latina, ¿amenaza para la democracia?” en Klaus Bodemer (editor) *El nuevo escenario de (in)seguridad en América Latina*, Caracas: Recal-Instituto de Estudios

- Iberoamericanos- Flacso Chile- Nueva Sociedad, páginas 16-18.
7. David Pion Berlin (2001). "Introduction", en David-Pion-Berlin (coord.) Civil-Military Relations in Latin America. New Analytical Perspectives, pág. 1, The University of North Carolina Press, Chapel Hill and London.
  8. La circunstancia de ser Costa Rica el único país latinoamericano que carecía de Ejército determinó que escapara intacta de los efectos de las doctrinas de seguridad continental y fronteras ideológicas que imperaran en Latinoamérica durante el Conflicto Este-Oeste.
  9. Hasta el momento, se trata de material fundamentalmente defensivo y que aparece más como destinado a construir capacidades de resistencia ante una eventual invasión, como los 100.000 fusiles de asalto AK103 y AK 104 Kalachnikov adquiridos a Rusia, o la compra de aviones CASA españoles de transporte militar C-295 y 2 CN235 para vigilancia marítima, demorada por gestiones estadounidenses, 53 helicópteros MI 17V5, de asalto, MI-35M de ataque y MI26, de transporte. Los 24 aviones cazabombarderos Sukhoi 30 adquiridos a Rusia aparecen como inferiores a otros aparatos de generación reciente, como los aviones de combate F-22 y F-36 de Estados Unidos, o el *Eurofighter* europeo, y pueden ser considerados, en todo caso, como equivalentes aproximados a los F-16 Block 50 adquiridos por Chile. Aún los nueve submarinos cuya futura adquisición ha anunciado Venezuela, sin haberla contratado aún —cuya construcción demandará tiempo— aparece como una medida defensiva y disuasiva. No se ha procedido a adquirir elementos de proyección de poder, como portaaviones o aviones estratégicos, ni se cuenta con misiles de largo, medio o corto alcance. En realidad, y sin contar con los ambiciosos pero aún no ejecutados planes de equipamiento atribuidos a Chávez, y consideradas en su conjunto, las capacidades militares de Venezuela aparecen hoy como significativamente inferiores a las de países como Chile y Brasil.
  10. Se trata del *Acuerdo Complementario al Convenio Básico sobre Cooperación Técnica entre la República de Bolivia y la República Bolivariana de Venezuela en materia de Defensa* firmado en La Paz el 26 de Mayo de 2006, con el objeto de

*...establecer mecanismos de cooperación técnica entre las Partes, para el mejoramiento y complementación de las capacidades de defensa de cada país, a fin de contribuir al desarrollo integral de sus pueblos* (artículo 1º). Se estableció un grupo de trabajo venezolano-boliviano, constituido por funcionarios del área de defensa de ambos países, destinado a dirigir y coordinar las actividades de cooperación que tuvieran lugar conforme al acuerdo, y se declara el propósito de fomentar la cooperación entre las Fuerzas Armadas de ambos países, en diversas áreas que se enuncian (artículo 4º). Propiciándose además la cooperación en materia técnica e industrial para la defensa, y en este último aspecto, la construcción de un puerto en la localidad de *Puerto Guijarro*, y de un *Fuerte Militar* en la localidad de Riberalta, y declarándose el propósito de cooperar para la modernización del material bélico terrestre, naval y aéreo (artículo 7). Se trata, obviamente, de un acuerdo que en la práctica podría representar un mejoramiento de las precarias capacidades militares de Bolivia y de la influencia del presidente venezolano Chávez en la región, aunque no aparece como revestido de gran significación, porque, al menos por el momento, Venezuela dista hoy de constituir una potencia militar. Cabe destacar finalmente que el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera afirmó recientemente que Bolivia no había recibido *...ni un cartucho...* de Venezuela, desmintiendo afirmaciones de *The Military Balance* de Londres, que señalaba que Bolivia estaba recibiendo armas (*El Mundo de Bolivia*, 16.2007, en <http://www.elmundo.com.bo> (acc. 16.9.2006).

11. Mientras la nota de *Folha de Sao Paulo* (*Folha On Line*) del 16.2.2007 de Kennedy Alentar (<http://www1.folha.uol.com.br/folha/pensata/ult511u291.shtml> - acc. 17.2.2007) califica al acuerdo como *La gran jugada de Lula*, señalando que constituyó una decisión aceptable en términos económicos para Brasil que mostró razonabilidad y prudencia, evidenciando una actitud moderada y progresista que lo contraponía ante la opinión pública mundial a la beligerancia autoritaria de Chávez, por otra parte, también en términos futbolísticos, en la BBC bajo el título *Evo 1, Lula 0*, la comentarista Valentina Álvarez enuncia las opiniones adversas de diversos analistas políticos y de legisladores de la oposición que acusaron al presidente brasileño de debilidad y

- complacencia frente a los reclamos de Evo Morales (15.2.2007, [http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin\\_america/newsid\\_6365000/6365257.stm](http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6365000/6365257.stm) (acc. 18.2.2007). Creemos que la razón asistió al primero y que realmente Lula realizó una gran jugada, aunque haya que esperar para ver si constituye gol o no.
12. El *Comité Permanente de Consulta y Coordinación Política* es un órgano constituido por los Ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de ambos países creado por la *Declaración Conjunta Presidencial del 30 de Julio de 2001* con el objeto de fortalecer e intensificar la confianza mutua entre Chile y el Perú en el campo de la seguridad y la defensa. El *COSEDE* constituye un órgano formado por representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa de ambos países con rango de Subsecretario, y miembros de las Fuerzas Armadas., surgido del Memorándum de Entendimiento entre la República del Perú y la República de Chile para el Fortalecimiento de la Cooperación en Materias de Seguridad y Defensa de Interés Mutuo.
  13. Ver sobre el rol de la integración subregional en la prevención de conflictos en el Cono Sur, de José Manuel Ugarte (2004). “Prevención de conflictos y el rol de las organizaciones de la sociedad civil en el Cono Sur”, *Pensamiento Propio N° 20*, julio-diciembre 2004, Buenos Aires-Caracas: CRIES.
  14. Creado originariamente por Brasil, en agosto de 2006 dicho país incluyó a Brasil y Paraguay en evidente respuesta a las preocupaciones estadounidenses con relación al posible apoyo económico al terrorismo islámico por parte de la importante comunidad musulmana existente en la zona, especialmente en Ciudad del Este (Paraguay) y Foz do Iguazu (Brasil). En realidad, dicho centro vino a superponerse a un mecanismo de cooperación en inteligencia ya preexistente, el *Ámbito Terrorismo*, creado en el marco de la cooperación en seguridad pública en el MERCOSUR ampliado, establecido a través de la Reunión de Ministros del Interior y equivalentes del MERCOSUR (RMI). Sobre este aspecto ver de José Manuel Ugarte (2005). “Cooperación en materia de inteligencia en el MERCOSUR ampliado”, disponible en Internet en <http://www.aainteligencia.cl/AA2005.pdf> (2do. trimestre), acc. 16.2.2007.
  15. En relación al detalle de los múltiples conflictos territoriales vigentes en Centroamérica y el Caribe, remitimos a la prolija enumeración de Isabel Jaramillo Edwards (2004). “Conflictos, prevención y sociedad civil en el Caribe”, *Pensamiento Propio N° 20*, Julio-Diciembre 2004, Buenos Aires-Caracas: CRIES, páginas 79/82.
  16. En el informe aludido, del *Instituto Ciudadanía*, denominado *Proyecto Seguridad Pública*, publicado en el *website* del Ministerio de Justicia brasileño (<http://www.mj.gov.br/noticias/2003/abril/pnsp.pdf> acc. 4.2.2007) se señala que en la Ciudad de Río de Janeiro, de cada grupo de 100.000 habitantes, 239 jóvenes de sexo masculino, entre 15 y 29 años de edad, fueron víctima de homicidios. Estas cifras se aproximan a las que son propias de los conflictos armados o violentos, destacándose en el citado informe que los efectos de esta situación son ya perceptibles en la estructura demográfica brasileña, en la que se advierte un déficit de jóvenes del sexo masculino, sólo comparable a la que presentan las sociedades que se han encontrado en guerra.
  17. Para el cual designara a Caleb Mc Carry, que se desempeñara como asesor parlamentario del Partido Republicano pero fundamentalmente como coordinador de programas en el *Centro para la Democracia*, entidad no gubernamental que encarara proyectos en transiciones en Europa oriental, experiencia que evidentemente fue tomada en cuenta, pensando en una transición análoga en Cuba.
  18. Nombre popular del partido político paraguayo *Asociación Nacional Republicana*.
  19. Unión Nacional de Colorados Éticos.
  20. Tal es lo que surge de la lectura de un relativamente reciente reportaje al profesor Luis Alfonso Resk realizado por Rosalía Ciciolli (Convenio Rel-Ulita / La Insignia, Paraguay, febrero del 2006, disponible en [http://www.lainsignia.org/2006/febrero/ibe\\_055.htm](http://www.lainsignia.org/2006/febrero/ibe_055.htm) acc. 3.2.2007 que lleva el elocuente título *Han matado nuestras esperanzas*.
  21. Alfredo Jaeggli, senador nacional de Paraguay por el PLRA, en el reportaje realizado por Norma Domínguez, titulado elocuentemente *El MERCOSUR para nosotros fue un balde de agua fría*, *América Económica*, 21.04.2006, disponible en

- <http://www.americaeconomica.com/portada/entrevistas/abril06/210406/jaeggli210406.htm> acc. 6.2.2007
22. MSN Noticias, 13-2-2007, disponible en <http://latino.msn.com/noticias/articulos/ArticlePage.aspx?cp-documentid=2982733> (acc. 14-2-2007).
  23. ABC Digital, 16.2.2007, disponible en <http://www.abc.com.py/articulos.php?pid=311230> (acc.16.2.2007).
  24. A.P.F.M. MERCOSUR, 16.2.2007, disponible en [http://www.apfmercosur.com.ar/despachos.asp?cod\\_des=43859](http://www.apfmercosur.com.ar/despachos.asp?cod_des=43859) acc. 26.2.2007
  25. José Carlos Rodríguez (2007). “La nueva política pendular de Paraguay: entre el MERCOSUR y el ALCA”, *Nueva Sociedad*, enero-febrero 2007, disponible en política\_pendular\_paraguay [http://www.nuso.org/upload/articulos/3347\\_1.pdf](http://www.nuso.org/upload/articulos/3347_1.pdf)
  26. Alfredo Jaeggli, reportaje citado. ...*Yo como liberal le estoy diciendo que si fuera el Ejecutivo, lo primero que haría con Paraguay es salirme del Mercosur. No nos sirve...*
  27. Según información de *Clarín* de Buenos Aires (3.10.2006) el ministro de Relaciones Exteriores Rubén Ramírez manifestó que su predecesora Leila Rachid había ya comunicado al Subsecretario de Estado para asuntos Latinoamericanos Thomas Shannon, la decisión de dar por concluida la inmunidad a partir de 2007.
  28. Ver reportaje de Radio Mundo Real a Vidal Acevedo, Vidal Acevedo, Coordinador del Programa Desmilitarización y Alternativas No Violentas del *Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ)* en Paraguay, 5.8.2005, disponible en <http://www.lahaine.org> (acc. 15.2.2007).
  29. MERCOSUR ABC, 28.9.2006,
  30. Jorge M. Battaglini (2007). *Actores y dinámica reciente del conflicto colombiano*, Análisis de Coyuntura elaborado para CRIES.
  31. Francisco Rojas Aravena (1999). El reracionamiento estratégico: un concepto que requiere ser desarrollado, en, *Argentina, Brasil y Chile; integración y seguridad*, Caracas: FLACSO-Chile, Editorial Nueva Sociedad, pág. 27.
  32. Sobre el rol de la sociedad civil en Guatemala y Nicaragua en la prevención y resolución de los conflictos armados violentos que sufrieron dichos países, ver de José Manuel Ugarte (2004). Formulación consensuada de políticas de defensa y seguridad en América Latina: la participación de la sociedad en cuestiones fundamentales. Las Vegas: Latin American Studies Association (LASA). Sobre el rol de la sociedad civil en la materia en Centroamérica, de Gabriel Aguilera Peralta (2004). “Sísifo revisado: Conflictos y conflictividad en Centroamérica” en *Pensamiento Propio* N° 20, julio-diciembre 2004, Buenos Aires-Caracas: CRIES.
  33. Andrés Serbin (2004). “Sociedad civil, diplomacia ciudadana y prevención de conflictos”, en *Pensamiento Propio* N° 19, enero-junio, Buenos Aires-Caracas: CRIES pág. 10.



**Coordinadora Regional de Investigaciones  
Económicas y Sociales (CRIES)**

Lavalle 1619 Piso 9º Ofic. A  
(1048) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina  
Tel./Fax (54 11) 43 72 83 51  
E-mail: [info@cries.org](mailto:info@cries.org) - Website: [www.cries.org](http://www.cries.org)

**DOCUMENTOS**

**CRILES**